

JAIME CAYCEDO TURRIAGO*

MILITARIZACIÓN Y ALTERNATIVA POPULAR

OTRA MIRADA SOBRE LAS LUCHAS SOCIALES EN COLOMBIA

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca> - biblioteca@clacso.edu.ar

EL OBJETO PRINCIPAL DE ESTE ESTUDIO es trazar las ideas esenciales de lo que denominamos la respuesta popular. Respuesta a la dinámica ofensiva del poder global imperialista. Que es, a su vez, manifestación inicial de los procesos nuevos en incubación en que las clases sociales anticapitalistas y aquellas fracciones tradicionales de la burguesía afectadas hoy por los cambios en el sistema se encuentran y coinciden en la resistencia. Por lo tanto, momento crucial, punto de viraje hacia nuevos escenarios de las luchas sociales y políticas, en que las primeras se masifican, se hacen más intensas y persistentes, tocan intereses estructurales de la dominación y, en varios casos, engranan con procesos de cambio político que abren horizontes a transformaciones en el poder.

Varios ejemplos son perceptibles en América Latina. Somos un continente donde, en la actualidad, se condensan varias de estas características en experiencias plurales pero continuadas. Desde la revolución democrática bolivariana en Venezuela, pasando por las situaciones en Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay y Panamá, donde gobiernos condicionados por la presión social para la reorientación de las políticas públicas dominadas por los compromisos neoliberales con el gran capital transnacional

*Antropólogo, PH.D., Ms, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, secretario General del Partido Comunista Colombiano.

y su agente principal, el FMI, ensayan alternativas híbridas, con resultados diversos y, en ciertos casos, contradictorios. Uruguay se inicia en este rumbo, con la ventaja de la unidad popular como experiencia social de larga data, afianzada en la disposición de lucha de los trabajadores, y componente de una cultura política democrática avanzada. A esto podríamos agregar los efectos de una nueva relación entre crisis y crecimiento de las movilizaciones populares, en el Salvador, Bolivia, Colombia, Perú, Chile, incluso en Ecuador; que enlazan el fortalecimiento de la lucha de masas y la convergencia de nuevas fuerzas sociales hacia la izquierda del espectro político. Aun en los momentos de aparente fracaso o avance lento, lo que se destaca es la antesala de nuevas promesas de cambio.

La respuesta popular de la que hablamos tiene un referente claro: el proyecto económico y sociopolítico del imperialismo de Estados Unidos y su componente militar, cada vez más influyente, representado por el intervencionismo militar preventivo con el pretexto antiterrorista. Para América Latina, este proyecto tiene un contenido absorbente y neocolonial. Y unos instrumentos jurídico-políticos que le han permitido amarrar situaciones en el continente: la OEA, como organismo multilateral histórico de carácter excluyente (en el caso de Cuba y cualquier *transgresor* del orden regional); el ALCA; y el Comando Sur –Plan Colombia– Plan Patriota, componente militar en torno al cual EE.UU. no ha logrado reunir un escenario multilateral ni alcanzado consenso para volverlo parte del TIAR o de algún otro acuerdo regional vinculante. Simplemente actúa de facto con la complacencia de gobiernos cómplices.

Se ha hecho cada vez más grande, en los últimos años, el repudio a este proyecto. En lo económico, se traduce en el agotamiento en estallidos convulsivos de las políticas neoliberales de la primera generación y los innumerables obstáculos que encuentran las adornadas propuestas de segunda generación, incluidas sus sugerencias sociales que intentan paliar los puntos críticos sin tocar el modelo. El ALCA entró en receso desde el primer bimestre de 2004 y se redujo al formato *light* de la última cumbre en Miami (2003).

En un gesto típicamente imperial, la administración Bush convocó a sus gobiernos amigos para suscribir tratados bilaterales de libre comercio (TLC) en negociaciones compartidas. Al no lograr insertarse en el acuerdo de los centroamericanos, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, decidió liderar la negociación de tres países andinos, Colombia, Ecuador y Perú, desconociendo el papel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el período de negociación del ALCA.

En los últimos tres años Washington fracasó en lograr la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, suscrita en Lima el 11 de septiembre de 2001 contra el proceso bolivariano de Venezuela, pese a los arduos esfuerzos del entonces secretario general de aquella organización, el ex presidente colombiano César Gaviria Trujillo. Pretende ahora una modifica-

ción de la misma para hacer posible la intervención para impedir cambios no deseados por Washington en un determinado país, aunque los mismos obedezcan a procesos democráticos que resultan de la voluntad popular.

La conferencia de ministros de Defensa en Quito en noviembre de 2004, representó un serio revés a la idea de constituir una fuerza militar colectiva antiterrorista y establecer un listado de organizaciones que incluyera a las organizaciones guerrilleras colombianas, tal como lo pedían el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el ministro de Defensa Uribe Echavarría.

Nada de esto puede ser visto como intrascendente o puramente circunstancial. Hay que tener en cuenta las crecientes resistencias, las denuncias, las presiones sociales, gubernamentales y diplomáticas que obran en la realidad política del continente. Si en lo económico y lo político-militar Washington ha tropezado con estos obstáculos, nada impide que aparezcan otros más. La crisis de las relaciones entre Colombia y Venezuela a raíz del secuestro en Caracas de Rodrigo Granda, cuadro político de las FARC-EP, en diciembre de 2004, puso de manifiesto un problema de fondo. Detrás de la distancia entre los dos gobiernos se perfilan las dos visiones divergentes en la política externa de los países hemisféricos. La que se alinea con el concepto de la guerra preventiva de Bush e intenta envolver y comprometer a los gobiernos de la región en aventuras intervencionistas bajo la estrategia militar del Plan Colombia. Y la tendencia a la autonomía e independencia de América Latina frente a EE.UU., con base en el respeto a la soberanía de cada país y cada pueblo, y el derecho pleno e irrenunciable a la autodeterminación nacional de los estados latinoamericanos, más allá de la Carta “democrática” de la OEA. Es la carga de profundidad dirigida a obstaculizar la Comunidad Sudamericana de Naciones, cuya Carta constitutiva fue suscrita en Cuzco el 9 de diciembre de 2004.

Dicho de otra manera: se ha puesto de manifiesto no sólo la crisis de las relaciones entre dos países hermanos, histórica, económica y territorialmente unidos, sino la crisis del Plan Colombia y del proyecto neocolonial del imperialismo estadounidense en la región. Y, a la vez, se ha resaltado la trascendencia y vitalidad de los pasos hacia la integración latinoamericana.

Afirmamos que en esta crisis del proyecto imperialista en curso desempeñan un papel fundamental la lucha de masas y su creciente alcance político. Sin embargo debemos preguntarnos: ¿cómo lo hace, y cómo pueden obrar los factores subjetivos para aprovechar con audacia y habilidad opciones y oportunidades?

Intentemos examinar las contradicciones que se anudan en Colombia y la región andina. Ellas parten de una premisa: el proyecto de Washington no es sólo económico y político, sino también militar. El modelo busca arrastrar otros componentes del imperialismo, especial-

mente a la Unión Europea, al menos mientras perduren los gobiernos conservadores y de la derecha socialdemócrata en ese continente. Trata de formar un grupo de aliados entre los gobiernos de la región. El que ha servido de auxiliar en esa función, hasta ahora, ha sido el de Colombia, lo que no es poca cosa: es el corazón de la CAN y el puente geopolítico hacia América de Sur, donde está la fuente de recursos estratégicos indispensables para alimentar el predominio global central del capitalismo estadounidense. En América Latina se mueven procesos sociales que el jefe del Comando Sur ha descrito como *populismos radicales*, una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Analizaremos, en primer término, lo que llamaremos el paquete político-militar de la militarización contrainsurgente en la región andina bajo las excusas antinarcóticos y antiterroristas, en lo que podemos avanzar como su crisis. Trataremos de destacar luego el significado de la situación de Colombia en este contexto para ayudar a hacer comprensible el alcance de las luchas populares que allí se libran, en su gama diversa. Nos aproximaremos a una conclusión desde la óptica de que están en el orden del día cambios políticos transformadores para remover las viejas estructuras de clase oligárquicas en crisis.

Pero, sobre todo, en el sentido de mostrar que la situación de choque con el proyecto imperialista en Colombia envuelve a la región andina, y que la amenaza del intervencionismo enfocada contra Venezuela acrecienta el peligro para la paz y la convivencia sudamericanas.

LA MILITARIZACIÓN Y SU CRISIS

Colombia atraviesa un período de intensa militarización del Estado y la sociedad. No empezó con el gobierno de Uribe Vélez, pero sí se acentuó con él. Son, en realidad, los dos últimos gobiernos los que han engranado el cambio de coordenadas de la política colombiana. Andrés Pastrana llegó a la presidencia con la promesa de buscar la paz, propició un proceso de diálogo con las FARC basado en reconocerlas como interlocutor político y diferenciarlas del narcotráfico, convino una agenda común de temas a resolver en una negociación. Simultáneamente ahondó la política de ajuste neoliberal, aceptó el Plan Colombia aprobado por el Congreso estadounidense y, después del 11 de septiembre de 2001, jugó sus cartas para romper el proceso y culpar unilateralmente a la guerrilla –a la que empezó a calificar de terrorista– y le abrió la puerta a la política de la ultraderecha en relación con la paz. Uribe fue el favorecido por ese viraje que, literalmente, lo proyectó a la presidencia.

El acelerador de esta tendencia militarista es, sin duda, la política estadounidense dirigida a incrementar su presencia militar en América Latina. Este acento deriva del triunfo de Bush en su reelección y la

reafirmación de una política exterior más arrogante y agresiva. Varios ejemplos del despliegue militar –que va desde la continuidad de la ocupación de Irak hasta el secuestro del presidente de Haití y la invasión a ese país, secundada después por tropas de varios estados sudamericanos y de Francia, además de EE.UU.– muestran la centralidad del factor militar en el reordenamiento mundial y su estrecho vínculo con el proyecto económico y político neoconservador en franca ejecución (Amin, 2003; Tokatlian, 2004).

La identificación de nuevas amenazas a la seguridad nacional en la región pone en evidencia el enfoque de las áreas ausentes de autoridad gubernamental en las que EE.UU. ayuda a los estados latinoamericanos a restablecer la soberanía. Según esto, el Comando Sur establece cuáles son esos lugares dentro de las fronteras nacionales con el fin de implantar una *soberanía efectiva*. Se trata de un nuevo concepto que el general James Hill, ex comandante, define así:

Hoy la amenaza a los países de la región no es la fuerza militar del vecino o algún poder invasor extraño. Hoy el enemigo son los terroristas, los narcotraficantes, los falsificadores de documentos, los jefes del crimen internacional y los lavadores de dinero. Esta amenaza es una cizaña que es plantada, cultivada y alimentada en el fértil suelo de espacios desgobernados, tales como costas, ríos y áreas despobladas de frontera. Esta amenaza es regada y fertilizada con dinero de la droga, venta ilegal de armas y tráfico humano. Esta amenaza no respeta límites geográficos ni morales¹.

El Comando Sur demarca unas nuevas fronteras interiores del peligro. El Plan Patriota, concreción particularizada de las operaciones contrainsurgentes dirigida a las FARC en el sur de Colombia, parece encajar perfectamente en esa definición. Pero no se reduce al espacio territorial de este país exclusivamente. El propio Hill reconoció, en octubre de 2004, la existencia de una directriz especial para Ecuador, llamada “matriz de seguridad para la frontera” en la que se fijan seis tareas para las fuerzas armadas².

El peligro dentro de las fronteras colombianas, extrapolado bajo la forma de acción para contrarrestar la debilidad gubernamental y el escaso

1 James Hill, marzo 3 de 2003. Ver en <http://www.ciponline.org/colombia/03030301.htm>.

2 Las tareas fijadas son, entre otros compromisos: la construcción de batallones e infraestructura en la Amazonia; el mejoramiento de la capacidad de la fuerza; la provisión de armas y equipos para operaciones especiales; la ejecución de programas de entrenamiento; operaciones de inteligencia; la instalación de facilidades aéreas y marítimas en Galápagos. La Matriz de Seguridad para la Frontera es un documento denunciado por el diario *El Comercio*, el 17 de febrero de 2004. Tomado de Altercom, Quito, Ecuador, 13 de octubre de 2004. Ver en www.altercom.org.

cubrimiento militar de los límites, se ha convertido en la excusa para el reforzamiento de las bases militares cerca de Venezuela y la presencia de personal estadounidense en Arauca. Como es conocido, en 2003 se hizo efectiva la ayuda militar, de alrededor de 100 millones de dólares, desvinculada de la acción antidroga del Plan Colombia y destinada a la protección del oleoducto Caño Limón-Coveñas, considerado por la administración yanqui como prioridad para su seguridad nacional. Tanto el Plan Patriota como el desembolso de asistencia extra Plan en la frontera con Venezuela forman parte de otra demarcación interna que proyecta la injerencia militar de EE.UU. en la compleja relación entre Colombia y Venezuela³. Es, en cierta forma, el diseño de un escenario cuya conflictualidad había pasado a un segundo plano desde mediados de los años ochenta, para devenir en el intento de convertir las diferencias de los proyectos políticos nacionales, ampliamente divergentes, entre Uribe y Chávez, en la causa de acciones intrusivas y desestabilizadoras del paramilitarismo y de los servicios de inteligencia colombianos en Venezuela, lo que llegó a un punto crítico a comienzos de 2005, como ya explicamos.

No afirmamos lo anterior sin una razón concreta. La orientación del Comando Sur agrega como una amenaza nueva, que se añade a las anteriores, lo que denomina el populismo radical. Por ello traduce el surgimiento de gobiernos de izquierda que reflejan las expectativas sociales de masas y que indican la existencia de una nueva percepción subjetiva de las fuerzas populares para su intervención en el destino de los estados de la región. Para Washington, los gobiernos legítimos que ensayan rutas de solución de los graves problemas sociales, acumulados y agudizados por las políticas neoliberales, pueden constituir una amenaza de su seguridad, lo que implicaría como consecuencia la necesidad de contrarrestarlos y, en ciertos casos como el de Venezuela, tratar de echarlos abajo. La *doctrina del peligro populista* es indisociable de la *doctrina de la soberanía efectiva*, es decir, del intervencionismo político-militar entendido como el derecho eminente del imperio de contención sobre los procesos sociales en curso, para interferirlos y para remodelar las fronteras y los estados según el institucionalismo jurídico transnacional en trance de erigirse como envoltura de la globalización⁴. Este remodelamiento neoinstitucionalista es compatible con la estrategia del ALCA y con la

3 Ver "Blurring the Lines. Trends in US military programs with Latin America", en <<http://www.ciponline.org/facts/0410btl.pdf>>.

4 En su informe anual al Congreso el 20 de abril de 2004, "Hill presentó una lista de amenazas emergentes en América Latina que va más allá de lo que corresponde a un enfoque militar normal, al identificar el 'populismo radical' y las bandas callejeras como las mayores nuevas amenazas por enfrentar en el hemisferio". James Hill, respuesta del Comando Sur a Joy Olson, Washington Office on Latin America, 20 de abril de 2004, en <<http://www.ciponline.org/facts/0410btl.pdf>>.

imposición de tratados de libre comercio que condicionan las formas constitucionales sobre las que se han erigido la soberanía económica y el derecho a la autodeterminación nacional.

Para el caso colombiano, la tensión que introduce esta variante de la guerra preventiva permanente es particularmente fuerte (Caycedo Turriago, 2004). Se hizo explícita con la puesta en escena del Plan Colombia como política de Estado de EE.UU., aprobada por el congreso de ese país bajo el gobierno demócrata de Bill Clinton. En ese entonces, la razón principal que informaba el plan era la lucha antinarcóticos. Entre 1994 y 1998 Colombia había sido denunciada como una *narcodemocracia* según los estándares del Departamento de Estado en su calificación del gobierno del liberal Ernesto Samper. La carta de intención del plan para el período 2000-2005 implicaba una orientación antinarcóticos más vale oblicua. En efecto, el peligro insurgente para la gobernabilidad del país provenía de la capacidad económica de la guerrilla, originada en su control sobre la producción y comercialización de narcóticos. Según esta presunción simplista, el problema a atacar era la fuente económica y no necesariamente la insurgencia misma. Recordemos que bajo el Plan Colombia tiene lugar el más importante proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en la región del Caguán, roto en febrero de 2002. El gobierno colombiano, EE.UU., y la llamada comunidad internacional, consideraban a los grupos guerrilleros colombianos como interlocutores políticos, portadores de una propuesta social, y no como terroristas.

Esta perspectiva cambia con el nuevo enfoque de la línea externa de Bush. En la agonía de su mandato Andrés Pastrana habla de grupos terroristas, y Álvaro Uribe gana la presidencia con la propuesta de derrotarlos militarmente. Uribe apoya abiertamente la agresión militar de EE.UU. a Irak. En lo interno, formula la idea de que el problema principal de la sociedad colombiana es el terrorismo y que la seguridad democrática, como orientación de Estado, está por encima de toda prioridad social. Arguye el gobierno que esta política ha resultado exitosa. Según sus cifras, los índices de homicidios, secuestros, masacres, violaciones de los derechos humanos y desplazamiento forzado han disminuido. Varios estudios aseguran, sin embargo, que hay una subestimación e, incluso, ocultamiento de datos. Por discrepancias en torno de datos estadísticos sobre la violencia y de las características del censo de población previsto para 2005 –cuyo carácter de empadronamiento policial creó especial alarma– fue destituido el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)⁵.

5 Según el diario económico *Portafolio*, “la gota que rebozó la copa de este conflicto entre el gobierno y el Dane fue la encuesta sobre victimización en el 2003. Ayer el director saliente del Dane, César Caballero, aún dolido, se resolvió a hablar y a explicar porqué en su carta de renuncia señaló ‘pero muy a pesar mío he recibido una orden que moralmente me siento incapaz de cumplir’. El asunto se desató el martes cuando el Dane y Planeación

Estos hechos autorizan a poner en duda las referencias estadísticas que proporciona el gobierno colombiano. A la vez, aconsejan contrastar otras fuentes, generalmente discrepantes.

MILITARIZACIÓN Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Desde adentro del Estado colombiano, una concepción militarista hace carrera. La política de seguridad *democrática* tiene una aplicación en la lógica de la contrainsurgencia. Significa colocar al conjunto de la sociedad en función del proyecto de contención social bajo el pretexto de la lucha contra la guerrilla. El orden normal y permanente de esta tarea de la sociedad es el llamado Estado comunitario. La solución frente a la guerrilla es su reducción por la vía militar. Creada esta situación, forzada al cese de hostilidades unilateral, se puede negociar. No se trata de una negociación política sino de “una negociación para (que la guerrilla desmovilizada pueda) intervenir en la política” (Restrepo, 2004: 1).

El mismo discurso oficial ha ido creando un cuerpo doctrinal. La fuente de esta idea de la no-negociación sin previo sometimiento a la seguridad democrática es una reelaboración unilateral de la concepción oficial acerca del carácter del conflicto interno histórico, al que se le niega sus bases en la desigualdad social, la exclusión política y su justificación político-militar. De allí su tesis esencial: *no existe conflicto armado interno*. Para algún *teórico* uribista lo hubo, hasta 1996, cuando Guatemala selló su proceso de negociación entre el gobierno y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Desde entonces, según este criterio, la guerrilla ya no persigue un ideal político, sino un negocio ilícito y un modo de vida. Con la política de seguridad democrática, hemos entrado en el post conflicto (Gaviria Vélez, 2005). Para llevar a buen término este proceso, la fuerza disuasiva del Estado y el orden interno, basado en la seguridad, la información de inteligencia y las medidas autoritarias que han intentado sustituir a las garantías y libertades de la Constitución de 1991, *deben pensarse y hacerse en la perspectiva de perdurar*. Representan un nuevo orden y un nuevo régimen político, más a la derecha que el viejo bipartidismo.

Nacional convocaron a una rueda de prensa, a las 9 de la mañana del día siguiente, en el departamento estadístico para entregar los resultados de la encuesta. Pero en la tarde del martes, el director del Dane recibió una llamada del secretario de Prensa de Palacio, Ricardo Galán, para ordenarle suspender la rueda de prensa. No era conveniente divulgar las conclusiones pues el Dane debía respetar el procedimiento establecido y abstenerse de hacer públicos los resultados hasta que los datos fueran conocidos y analizados por el Presidente y los demás miembros del Consejo de Seguridad” (*Portafolio*, 2004).

Haciéndose vagón del tren de Bush, *lo que hay en Colombia, como en el mundo entero, es una amenaza terrorista*. Tal es su segunda tesis. Luego, el destino manifiesto que se ha revelado con el gobierno de Uribe implica una labor mesiánica dirigida a América Latina, más específicamente a América del Sur. Según esta lógica, los gobiernos del continente deben alinearse, incondicionalmente, en los mandatos de la ONU y la OEA que mencionan la existencia genérica del peligro terrorista. Uribe va más allá. A raíz del incidente del secuestro del guerrillero Rodrigo Granda en Caracas y de sus consecuencias políticas para las relaciones binacionales, buscó infructuosamente un alineamiento de los gobiernos con su política en torno a dos temas centrales: la obligación de los mismos de no permitir la permanencia de terroristas en su territorio, y la plena tolerancia a la actuación de los mercenarios y “caza-recompensas” como un bazar macabro con manos libres para comprar conciencias en cualquier país, violando las leyes internas y el derecho internacional.

UNA NUEVA DOCTRINA DE LAS RELACIONES DE VECINDAD

Esta licencia quiere hacer de la seguridad democrática una nueva doctrina en favor de la violación de la soberanía de los estados vecinos y de todos aquellos que, de una u otra forma, puedan proporcionar asilo o albergue a quienes los gobiernos –colombiano y norteamericano– puedan calificar de terroristas. Sin embargo, podemos afirmar que la doctrina de la seguridad democrática, como doctrina extraterritorial, ha fracasado. No sólo no contó con otro apoyo distinto al que le dio EE.UU., sino que Uribe tuvo que viajar a Venezuela y aclarar su posición ante Chávez. El incidente quedó cerrado. Pero no el fondo de la situación, que puso de manifiesto lo que hemos advertido como el peligro real para Colombia y América del Sur: la utilización del régimen uribista, de sus recursos militaristas y del territorio nacional como una base operacional para la desestabilización de los países vecinos y una fuente de presión para enturbiar las relaciones históricas de cooperación de carácter pacífico. En síntesis, la perversa pretensión imperialista de convertir a Colombia en una especie de Israel contra el resto de sus pueblos hermanos, actitud a la que una franja de la oligarquía colombiana se ha prestado históricamente.

EL GIGANTISMO MILITAR

La militarización de la sociedad y el Estado colombianos es la consecuencia directa de esta visión. Las cifras oficiales que hablan de éxitos extraordinarios en cuanto a bajas de la guerrilla y logros de las fuerzas militares se utilizan para justificar el crecimiento del gasto militar y la ampliación de los operativos. El Plan Patriota –la versión más reciente del Plan Colombia en el sur del país– moviliza 20 mil efectivos de tropa. Según los análisis de

inteligencia militar, ha logrado confinar en la selva a las FARC, cortado sus comunicaciones terrestres y neutralizado su influencia en los alrededores de Bogotá. Sin embargo, los reveses de enero y comienzos de febrero de 2005 en el Putumayo (frontera con Ecuador), Iscuandé (costa pacífica suroccidental) y Urabá (noroccidente) indican que, en el mejor de los casos, deben tomarse con cautela los informes oficiales triunfalistas que dan por descontada la derrota estratégica de la insurgencia.

Datos del Ministerio de Defensa muestran que se está ante un incremento evidente del gasto militar, y que este repercute directamente en un crecimiento de los efectivos. A ello se agrega la necesidad de asegurar las operaciones aéreas, lo que equivale a nuevas compras de aviones para la contrainsurgencia, que el gobierno ha venido negociando con Brasil. Sin embargo, la presión de Washington busca inclinar las nuevas compras al incremento de la flota de Black Hawk de combate.

CUADRO 1
GASTO MILITAR - PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
(PORCENTAJE DEL PBI)

2004	3,5
2005	5,3*
Incremento	37

Fuente: Argenpress, 2004

* Corresponde a 11,84 billones de pesos (alrededor de 5 millones de dólares)

CUADRO 2
INCREMENTO DE EFECTIVOS EN 2005

Brigadas móviles	3 nuevas	total 15
Batallones de alta montaña	1 nuevo	total 7
Escuadrones móviles de carabineros	8 nuevos	total 54
Soldados campesinos	158 nuevos pelotones	total 754

Fuente: Villamizar y Espejo, 2004

CUADRO 3
CRECIMIENTO ESPERADO DEL PIE DE FUERZA

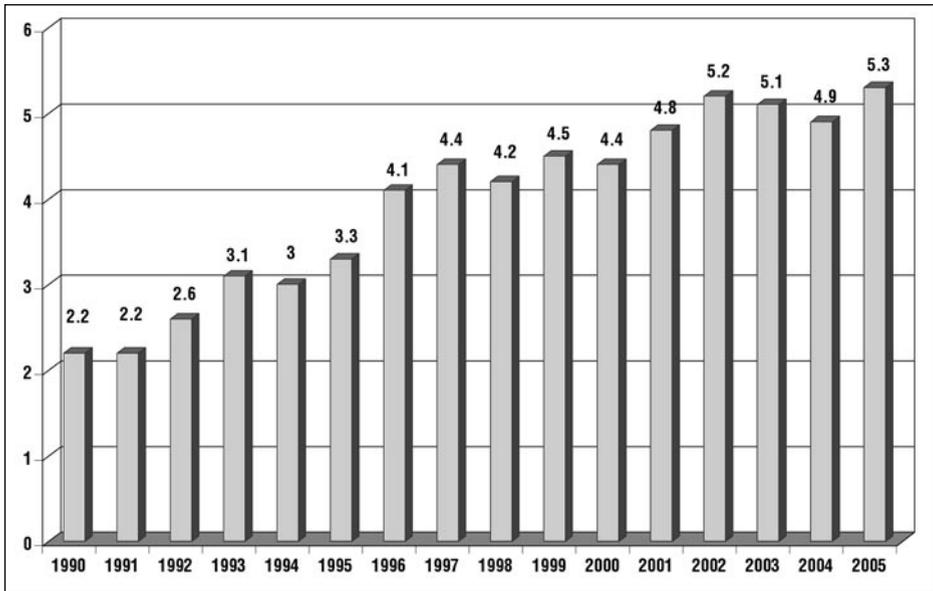
Pie de fuerza en 2002	278.796 hombres
Pie de fuerza en 2006	386.125 hombres

Fuente: Argenpress, 2004

De acuerdo con las aseveraciones del ministro de Defensa, Colombia tiene hoy la policía de nivel nacional más numerosa de América Latina y el ejército más numeroso, por encima incluso de Brasil. En 2006, tendrá el mayor número de militares por kilómetro cuadrado de América Latina. Hoy ostenta la quinta flota de helicópteros Black Hawk del mundo, después de EE.UU., Corea, Turquía y Japón⁶.

GRÁFICO 1

GASTO EN DEFENSA Y SEGURIDAD COMO PORCENTAJE DEL PIB 1990-2005



Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, citado por Villamizar y Espejo, 2004.

UNA CARRERA ARMAMENTISTA IMPUESTA DE AFUERA

Es natural la alarma en los ejércitos de la región y la consecuencia previsible de una carrera armamentista para contrarrestar la expansión de

6 "Hoy tenemos la Policía de nivel nacional más grande de América Latina y el Ejército más numeroso de toda la región, inclusive por encima de Brasil. El próximo año tendremos 17.573 nuevos soldados y policías, y en el 2006 el pie de fuerza crecerá en 12.176 hombres. En dos años tendremos el mayor número de militares por kilómetro cuadrado de América Latina. De igual forma, hoy en día Colombia cuenta con la quinta flota de helicópteros de UH-60 Black Hawk más importante del mundo, después de EE.UU., Corea, Turquía y Japón" (Uribe Echavarría, 2004: 1-19).

un ejército nacional, en este caso el colombiano, por encima de las proporciones de equilibrio militar de la región. Sin embargo, lo que particulariza esta preocupación no es sólo el crecimiento atrófico de las fuerzas armadas y de policía de Colombia. Este podría explicarse por las necesidades de la contención del conflicto interno, ya que en América Latina, más allá del gobierno colombiano, para ningún otro país es aceptable la pretensión de militarizar la acción antidrogas. Pero la inquietud es mayor cuando se considera lo que significa dicho crecimiento subvencionado por la potencia militar hegemónica en el plano global. Los analistas cercanos a las fuerzas militares destacan el crecimiento numérico de las tropas colombianas, por encima de todos los demás ejércitos de la región, y su considerable experiencia contrainsurgente, a la par que su nula preparación para una situación de conflicto regular. Al mismo tiempo, señalan la necesidad de que el ejército colombiano potencie aún más su número y su capacidad helicotransportada, incluyendo nuevos helicópteros de combate, aviones *fantasma*, tanques y transportes blindados, para producir un cambio estratégico en la correlación de fuerzas con la insurgencia (Villamizar y Espejo, 2004).

Un error de los analistas consiste en no contabilizar el peso de la inversión estadounidense en el crecimiento del poder de fuego del ejército y la policía militarizada colombianos. No toman en cuenta el significado de la flota de helicópteros, que sí preocupa a los ejércitos de la región, ni las consecuencias de los teatros de operaciones sobre las fronteras de los países vecinos y la eventual “exportación” de elementos de la guerra irregular, como es el caso de los paramilitares en territorio de Venezuela, Panamá y Ecuador. En fin, subestiman la superposición de comandos entre los mandos nacionales y el Comando Sur en el control de los datos estratégicos aportados por la información satelital y el control tecnológico sobre los recursos bélicos entregados por el Plan Colombia o “recomendados” para su compra por los asesores norteamericanos. Esta irregularidad evidente es, sin lugar a dudas, una de las causas del malestar y el peligro que advierten los observadores de una militarización de las fronteras y una multiplicación de los incidentes fronterizos, de una parte. De otra parte, las poblaciones de las regiones continentales andina, orinoquense, ístmica y amazónica, están siendo afectadas por distintas manifestaciones de esta militarización, con las implicaciones obvias para la vida cotidiana.

El gasto en defensa reseñado en el Gráfico 1 no incluye los aportes estadounidenses al Plan Colombia. Entre 2000 y 2005, período de vigencia del Plan, la inversión de Washington suma 3.998,6 millones de dólares, y 4.740,3 millones si se considera el proyecto en trámite para 2006. Contando el aporte para el año 2005 (de 781,6 millones de dólares), el gasto en defensa y seguridad se incrementa casi en un punto porcentual sobre el 5,3% del PIB, alcanzando el 6,1%. En promedio,

los aportes estadounidenses añadieron un 0,7% por año a los gastos de seguridad y defensa de Colombia (CIP, 2005).

La decisión de Venezuela de adquirir en Rusia cien mil fusiles AK 47, interceptores Mig 29 y helicópteros, o de ampliar su flota naval, se ha convertido en motivo de alarma bajo el aliento del Pentágono. Dos razones fundamentales pueden observarse en relación con estas decisiones soberanas de un Estado bajo situación de amenaza externa: el cambio de la posición estratégica de Colombia frente a Venezuela, con la instrumentación de EE.UU.; y la evidente y necesaria definición por parte de Venezuela de una hipótesis de conflicto en función de una agresión externa proveniente de o auspiciada por Washington.

De tiempo atrás Brasil ha venido reforzando su frontera amazónica y el sistema de vigilancia satelital, SIVAM, al descifrar el Plan Colombia, en términos de su seguridad nacional, como una amenaza de intervención militar de EE.UU. en el corazón de su *hinterland* amazónico. Estos fenómenos de carrera armamentista no deseada, que no son los únicos en la región, deben explicarse por la presión de la administración estadounidense y la instrumentación de los dos últimos gobiernos colombianos que se insertaron en la estrategia del Plan Colombia. La terminación de esta estrategia político-militar es una condición para el cese de esta escalada de armas y militarización regional, y para el logro de una paz que respete la soberanía y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos⁷.

EL REFORZAMIENTO DE ESTA POLÍTICA VINCULADA A LA REELECCIÓN DE URIBE

El panorama político y militar arriba descrito puede proseguir y afectar mucho más, no sólo la situación interna de Colombia, sino la de la región andina y sudamericana en los años que vienen. Están en juego dos políticas en América Latina, que ciertamente no coinciden: la que representa el alineamiento incondicional o seguidista con Washington (económica de libre mercado: ALCA, TLC; reformista en los moldes del neoinstitucionalismo de la globalización: OEA, políticas financiadas por el BID, BM y patrocinadas por el FMI; político-militar: Plan Colombia, Plan Patriota, militarización) y la que refuerza los ángulos autonomistas frente al imperialismo y su estrategia integral (propuestas y proyectos de integración sudamericana, subregional y latinoamericana: Comunidad Sudamericana de Naciones, CSN, alianza CAN-Mercosur, Petroamérica, ALBA). Los años que vienen verán qué camino se impo-

7 Ver al respecto el documento "Por la paz democrática en América Latina, por la solución política en Colombia, por la amistad entre dos pueblos, contra el intervencionismo de Estados Unidos", presentado en el Foro Social Mundial Porto Alegre 2005 por el PCC/FSP de Colombia.

ne. La clave de lo nuevo en esta dinámica es el papel de las masas populares, el crecimiento de su disposición de lucha y de acción movilizadora y organizada, así como sus nuevos niveles de conciencia.

No podemos menospreciar el fenómeno que representa la derecha colombiana. Su debilidad mayor es la ausencia de una base social organizada, permanente y con un ideario político que muestre algo distinto a la continuidad y agudización de la guerra interior para los próximos tres a cinco años, con su enorme costo económico, humano y cultural. Para vencer esta limitación, Uribe asumió como línea principal de su gobierno la negociación con los paramilitares, en la perspectiva de formar una fuerza política armada que asegure su permanencia en el poder y un control electoral regional que se exprese en el parlamento, las gobernaciones y los municipios.

La oligarquía colombiana ha tomado el viejo rumbo de colaborar con la peor política sanguinaria y guerrillera de Washington, a cambio del respaldo para la reelección de Uribe, a través de un gasto público desbordado, con la aprobación del FMI. Este compromiso condena a Colombia al aislamiento y al recelo de los vecinos continentales por cuatro años más.

La crisis de las relaciones entre Colombia y Venezuela de principios de 2005, puso de manifiesto el peligro de regímenes retrógrados y militaristas como el de Uribe, ya no sólo como anomalías en la región, sino como factores perturbadores activos de la paz, la soberanía, la convivencia pacífica, la unidad y la integración de América Latina.

COLOMBIA: DE LA RESISTENCIA A LA ALTERNATIVA⁸

Los esbozos de una crisis del proyecto imperialista en curso no dependen del solo efecto de las contradicciones internas, sino del nuevo papel fundamental de la lucha de masas y su creciente alcance político. La pregunta que nos hemos formulado es: ¿cómo lo hace, y cómo pueden obrar los factores subjetivos para aprovechar con audacia y habilidad opciones y oportunidades?

DOS RASGOS DE LAS LUCHAS SOCIALES EN COLOMBIA

Un primer rasgo característico del movimiento popular colombiano es que la lucha armada guerrillera constituye un factor de la política que no es posible desconocer, negar o estimar simplemente como un obstáculo para una hipotética convivencia ciudadana moderna, propia de

⁸ Resaltamos este contraste a partir del título del libro de Álvaro Vásquez del Real, *De la Resistencia a la Alternativa* (2004), cuya temática encierra reflexiones de fondo sobre un crudo período de la vida colombiana entre 1998 y 2004.

regímenes democráticos. Precisamente, la lucha armada se explica por la inexistencia de democracia en Colombia, por su extrema limitación y recorte para el libre ejercicio de las libertades. La legitimidad formal electoral transcurre con métodos y recursos que restringen la libre expresión, que militarizan y reprimen regiones enteras, que destruyen las organizaciones de la oposición de izquierda como integrantes del llamado tejido social, que eliminan cuadros y activistas. No se trata sólo de una antidemocracia institucional.

“El avance capitalista, que en condiciones ‘naturales’ sigue de todos modos una vía de acumulación del capital que polariza la propiedad en unas manos y proletariza a diversas capas sociales de la ciudad y del campo, para convertirlos en asalariados y al mismo tiempo en bases del mercado interno para el capital, en el caso colombiano, se aceleró mediante el ejercicio de fenómenos violentos que despojaron a miles de familias y otorgaron a grupos de elite riquezas que no eran el resultado del mecanismo económico sino del ejercicio de la violencia. Por eso, en parte, la violencia de los años 50 y 60 ejemplifica lo que se llama la acumulación originaria del capital” (Vásquez del Real, 2004: 74).

En el modelo socioeconómico que predominó antes del fenómeno neoliberal existían las raíces de una violencia de clase, continuada y permanente, una verdadera modalidad extraña y anómala del ejercicio cotidiano del poder, más cercana a la que ejercieron las dictaduras militares latinoamericanas que a la democracia burguesa. Tras el derrocamiento de la dictadura militar en 1957, la llamada *transición a la democracia* copó un largo período de dieciséis años, bajo el formato civil del Frente Nacional de los dos partidos de la derecha, el liberal y el conservador. Tres objetivos guían la violencia política del poder en los años cincuenta: afianzar la propiedad agraria terrateniente; “montar la defensa a sangre y fuego del sistema” y de sus privilegios, y destruir “el importante movimiento de masas surgido durante la segunda guerra mundial”. Este último objetivo no prosperó plenamente en el proyecto militarista de las clases dominantes. Aun cuando muchas organizaciones fueron destruidas, y muertos innumerables dirigentes, una parte del movimiento popular tomó la vía de la acción armada ante la imposibilidad de luchar en condiciones legales. Como una imposición de circunstancias ya conocidas y prolongadas en el tiempo, este no fue un fenómeno mecánico. Implicó la “formación de una conciencia que pasa de la resistencia y la defensa a las aspiraciones de cambios profundos y necesarios” sin los cuales no es posible conquistar libertades y derechos esenciales para la vida diaria y la lucha social (Vásquez del Real, 2004: 75-76).

El autor citado identifica el tránsito de la fase de defensa y resistencia a aquella que dibuja nuevos contenidos con base en cambios políticos y a la vez transformaciones económicas y sociales entre finales de los años cincuenta y la primera mitad de los sesenta. Las guerrillas

liberales que se repliegan entonces tenían una dirección burguesa, y las corrientes revolucionarias eran incipientes. Un segundo tránsito lo advierte a comienzos de los noventa, cuando se producen las desmovilizaciones de grupos guerrilleros que reflejan capas sociales intermedias (M19, Esperanza Paz y Libertad, PRT, CRS, Quintín Lame) “sin un programa social claro y sin una composición popular revolucionaria”. En esta fase, el eje de la acción de la guerrilla apunta a cambios profundos en la composición del poder como punto de arranque de nuevas relaciones sociales, para la creación de un nuevo modelo político, económico y social con plenas garantías para la organización popular, cuyo protagonismo no sea sólo participativo sino decisorio (Vásquez del Real, 2004: 80-81).

Esta visión implica concebir el movimiento guerrillero como parte inseparable del movimiento popular, y el tema de sus relaciones con este en su conjunto y con los sectores intermedios (capas medias urbanas y rurales) como asunto vital para comprender los alcances y potencialidades de la lucha social en Colombia. Si bien la experiencia de la lucha guerrillera de larga duración indica que esta representa un factor insurreccional permanente, no niega su otra cara, la de ser factor de acumulación política para producir cambios en la correlación de fuerzas.

Un segundo rasgo del movimiento popular colombiano es que no tiene un carácter unilateral determinado por las formas de lucha. La existencia de la lucha armada no ha impedido el desarrollo y fortalecimiento de la lucha de masas abierta y de sus expresiones legales. Las clases dominantes han usado como pretexto la acción antisubversiva, el antiterrorismo, para justificar el modelo represivo masivo, la criminalización de la protesta social y la guerra sucia con eliminación de opositores. Asimismo, la lucha popular ha roto persistentemente esta camisa de fuerza. El tema de la libertad política, de las libertades en todos sus significados, de los derechos humanos e, incluso, del derecho internacional humanitario, han adquirido sentido y presencia en la lucha social como herramientas de la confrontación con la antidemocracia. Podría decirse, además, que la fuerza de la resistencia popular está en la diversidad de luchas, que se revisten en formas variadas, que se desenvuelven en escenarios diferenciados, pero en temporalidades coexistentes. Aun cuando no haya una relación directa, intencional, entre las luchas no armada y armada, la tendencia es a una coincidencia necesaria en los objetivos de cambio. Las motivaciones programáticas son un punto de confluencia necesario en el mediano plazo.

La lucha de masas no armada tiene una existencia propia y una dinámica que expresa la vitalidad del movimiento popular. Ha estado más expuesta a la influencia política e ideológica directa de las clases dominantes. Ha sido, a la vez, el objeto de la *guerra sucia*. Miles de activistas y dirigentes sociales y políticos han sido asesinados. La táctica de desan-

grar y exterminar el movimiento social sigue siendo un rasgo característico de las clases dominantes en Colombia. Por otra parte, el movimiento popular también ha dado prueba de su persistencia, de su capacidad de resistir y de reconstruirse. Hoy, nuevas luchas están en desarrollo.

Dos elementos que han alterado el desenvolvimiento normal y continuado del movimiento popular colombiano han sido la *guerra sucia* y el *desplazamiento forzado*. La primera tuvo el carácter de una operación dirigida a cumplir la misión macartista de eliminar a los cuadros y activistas políticos, sindicales y populares, de la Unión Patriótica (UP) y el partido comunista (PCC), en tanto fenómenos en desarrollo por efecto del primer intento de apertura, diálogo y negociación del Estado y las FARC.

La ultraderecha militarista, desde el seno del Estado y de sus fuerzas armadas, enfocó la acción al exterminio de los dirigentes políticos proyectados en el parlamento, los cuerpos colegiados y las alcaldías municipales. Al mismo tiempo mantuvo la antigua tendencia al asesinato de dirigentes sindicales y populares. En un lapso de quince años, entre 1985 y 2000, fueron muertos alrededor de 3.500 líderes políticos y sociales. Más que acciones de paramilitares, en una primera fase las víctimas cayeron como parte de operaciones directamente agenciadas por estructuras de inteligencia militar. En 1994 es asesinado el senador comunista Manuel Cepeda, en una operación planeada y ejecutada por funcionarios del Estado colombiano.

La guerra sucia colombiana pone al desnudo una estrategia de contrarrevolución preventiva para destruir, físicamente, a una fuerza política democrática (la UP), que trabajaba diligentemente en la lucha política de masas para afianzar una apertura y un viraje democráticos que dieran opciones a la búsqueda de la paz por la vía de la solución política y el diálogo entre el Estado y el movimiento guerrillero.

No es posible desligar a la guerra sucia de los procesos continuados del desplazamiento forzado. La metodología de asesinatos, masacres y amenazas disuasivas obliga a familias y grupos barriales, a emprender la huida y abandonar sus pertenencias, o sus tierras en el caso de sectores campesinos. El desplazamiento forzado, como fenómeno masivo, tiene una consecuencia política y político-electoral. Implica una reconfiguración del mapa de las regiones de las que son expulsadas las fuerzas políticas con presencia electoral, como autoridades en la región. El éxodo, varias veces repetido en la historia colombiana, arrastra consigo la historia de la formación de muchas de esas regiones y la repliega en una urbanización forzada. El desarraigo conlleva un trauma múltiple, económico, social y, sobre todo, humano.

El desplazamiento forzado es refugio interno y externo, esto último especialmente en las regiones de frontera.

CUADRO 4

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Año	Número de personas	Número de hogares
2000	168.400	33.680
2001	406.173	81.235
2002	483.021	96.604
2003	216.854	43.371
2004	124.794	24.959
Total	1.399.242	279.849

Fuente: Contraloría General de la Nación, 2004.

* Segundo Semestre, ** Primer Semestre.

Las cifras siguen siendo muy dispares según las fuentes de información. En el estudio de la Contraloría General (Contraloría, 2004) se consigna lo siguiente:

Para CODHES son desplazados quienes estén registrados en sus estadísticas desde 1985. Es decir que, al 30 de junio de 2004, esta cifra ascendía a 3.252.806 personas. El mismo cálculo efectuado por la RSS desde 1994 arroja 1.253.784 personas desplazadas, aunque estas cifras se encuentran subestimadas⁹

El cuadro de la Contraloría General de la República muestra los datos ajustados comparativamente en los últimos cinco años, que corresponden al tiempo en que ha regido el Plan Colombia. Una parte del desplazamiento forzado, sobre todo en los departamentos del sur del país (Guaviare, Caquetá, Putumayo), se explica en 2004 por los efectos del Plan Patriota.

Organizaciones de desplazados y de víctimas de la violencia reclaman, en la actualidad, ser escuchados en su exigencia de una política de castigo a los integrantes de aparatos del Estado y paramilitares con apoyo estatal, en el marco del debate sobre verdad, justicia y reparación.

La herida que representan estas condiciones para el movimiento popular es muy grande y notoria. Ha implicado cambios en la cultura que inspira las luchas sociales y ha abierto un vínculo entre la lucha por los derechos humanos, contra la impunidad y la necesidad de políticas públicas no reducidas al aspecto humanitario y caritativo provisional. La guerra sucia y el desplazamiento forzado son resultados de la conainsurgencia como política del Estado, que sólo pue-

⁹ Cuadro y comentario de la Contraloría General de la República.

den cambiar si se modifica la orientación de la misma. Entre tanto, es imposible desconectar estos fenómenos de la activa guerra social interior del Estado, porque entran en los cálculos estratégicos del des-poblamiento-repoblamiento de regiones, la recomposición político-electoral de las mismas y, en consecuencia, sus efectos en los balances de poder, tanto en los departamentos como en el nivel nacional (parlamento, presidencia de la república).

SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LA RESISTENCIA Y LA ALTERNATIVA

En amplia medida, los movimientos sociales se articulan en torno de y en el modelo del movimiento obrero. Desde su creación en 1986, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha sido un factor de la movilización. El comando nacional unitario, donde se reúnen las tres centrales sindicales y la organización nacional de pensionados, ha amplificado la resonancia de convocatorias de masas de gran importancia. En el encuentro de la inconformidad frente al referendo impulsado por el gobierno de Uribe el 25 de octubre de 2003 se creó la Gran Coalición Democrática (GCD), cuya actividad y dinámica logró unir a los diferentes sectores opuestos al proyecto oficial y derrotarlo al no alcanzar este el piso requerido para hacerse válido. La GCD es un vasto escenario donde confluyen el sindicalismo y una gran variedad de organizaciones sociales y no gubernamentales al mismo tiempo que las organizaciones políticas de la izquierda, entre las que se encuentran el Frente Social y Político (FSP), Alternativa Democrática (AD), el Polo Democrático Independiente (PDI), tres sectores del partido liberal y diversas otras corrientes independientes. La GCD adelanta unidad de acción con el Comité de Lucha contra el ALCA, la Red Recalca y otros sectores en la denuncia contra el TLC que negocia Colombia, junto a Ecuador y Perú, con Estados Unidos.

El triunfo contra el referendo ha tenido un hondo significado político y ha realzado el prestigio de la GCD y elevado su imagen. A su vez, la derrota de Uribe dificultó sus maniobras desde el gobierno. Frenó la cascada de impuestos indirectos convenidos con el FMI para financiar el pago de la deuda y el crecido gasto de guerra. Impidió una reforma aún más regresiva del parlamento y del sistema electoral. Frustró la tentativa de anticipar la finalización de los regímenes de pensiones especiales, por lo común pactados con las organizaciones sindicales. Detuvo el intento de suprimir las contralorías departamentales (control fiscal posterior) y las personerías municipales en las ciudades de más de cien mil habitantes. El resultado del referendo, desfavorable para el gobierno, dejó cojeando su estrategia económica y lo obligó a posponer buena parte de sus propósitos. La declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte del estatuto antiterrorista aumentó el cuadro de

contradicciones sociales, políticas e interinstitucionales con que ha tropezado Uribe. Se dice que, como consecuencia del referendo, se afianzó la idea de modificar la Constitución para plantear su reelección inmediata en las elecciones de 2006.

El año 2004 vio el surgimiento de un nuevo momento de la movilización de masas. Tras la desbordante conmemoración del 1 de mayo, el horizonte de la acción terció contra la primera reunión de negociación del TLC con sede en la ciudad de Cartagena, el 18 de mayo. No sólo tuvo el carácter de protesta contra el TLC y el ALCA. En varias partes del país, ante todo en la ciudad petrolera de Barrancabermeja, la presencia popular destacó su solidaridad con la huelga de los trabajadores petroleros, bajo el liderazgo de la legendaria Unión Sindical Obrera (USO).

El 22 de julio, a convocatoria de la GCD, se reúne la cumbre social y política, en la que participan la casi totalidad de las fuerzas políticas distintas a las que integran el gobierno. De ella emerge la definición de cinco puntos de unidad de acción para las luchas en curso, a saber: el rechazo a la agenda legislativa del FMI y Uribe en debate en el parlamento; la denuncia del estatuto antiterrorista y de la política de detenciones masivas arbitrarias; la lucha contra el TLC y el ALCA; el apoyo a la búsqueda de una solución política negociada en el conflicto interno con la insurgencia y de acuerdos humanitarios; y el punto central, la lucha contra la reelección de Álvaro Uribe.

Por otro lado, la iniciativa de movilizaciones en septiembre y octubre. La de septiembre se unió a la impresionante marcha indígena, especialmente en el sudoeste, cuyas consignas impugnaron el TLC, la política de seguridad democrática y la reelección. Consecuencia de esta es la consulta sobre el TLC en cinco municipios del noreste del departamento colombiano del Cauca, a efectuarse el 6 de marzo de 2005. En fin, la grandiosa manifestación nacional que movilizó un millón de personas en las principales ciudades. A los procesos de movilización reivindicativa se han sumado nuevas experiencias. Entre ellas, las expectativas por la decisión que asuma la Corte Constitucional sobre la reelección, dado el gran número de demandas instauradas en su contra.

Pero, lo más importante, los acercamientos entre distintas fuerzas con el objetivo de hallar puntos de programa en ruptura con el rumbo político del poder, la definición de una actitud de oposición integral a la seguridad democrática y el Estado corporativo, privatizado y neoliberal que se esconde en la noción manipulada del comunitarismo por la ultraderecha.

La idea de un proceso de unidad que pueda desembocar en una alternativa de nuevo poder no es ajena a la visión de la GCD. Se propone ser propiciadora de tales acercamientos, con el criterio de que no basta oponerse a la reelección: es preciso confrontar el modelo econó-

mico neoliberal político que desmonta las libertades democráticas y la línea que niega la posibilidad de la solución política y los acuerdos humanitarios. La izquierda viene buscando un papel importante en este panorama. Alternativa Democrática y el PDI discuten la opción de un programa común, de una candidatura presidencial única, listas únicas y un modelo organizativo adecuado a la brega electoral.

Hay un nuevo enfoque de la lucha social y del papel de los movimientos sociales en el momento presente. No basta su acción reivindicativa, economista o parcial. Se están abriendo las puertas para su actuar político. Pero no sólo en el campo electoral. La experiencia de América Latina ha mostrado que la decisión de las masas puede llegar incluso a producir cambios políticos sin aguardar a las elecciones. Para tales eventualidades deben prepararse las fuerzas populares, y la izquierda política tiene que asumir con seriedad los nuevos retos.

Sin embargo, no deben desdeñarse las dificultades. El debate actual sobre verdad, justicia y reparación o simplemente perdón y olvido, que ha tenido tan notoria incidencia en la lucha democrática latinoamericana de las últimas décadas (Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador), enmarca hoy la antesala del proceso electoral de 2006. Como se sabe, el paramilitarismo representa el principal componente de la estrategia política de la ultraderecha colombiana. Conjuga en sus aparatos clandestinos y abiertos los vínculos con la contrainsurgencia y, al mismo tiempo, la relación estrecha con el poder. Por eso, la pretendida negociación en Santa Fe de Ralito ha sido un turbio arreglo con responsables de crímenes de lesa humanidad, criminales de guerra que provienen de las fuerzas militares, vinculados a los aparatos irregulares, y narcotraficantes netos que pagaron cuantiosas sumas en divisas para ser incluidos como supuestos *actores* del conflicto, como los denomina la jerga oficial. El gobierno colombiano requiere un marco legal de su arreglo con el paramilitarismo para legitimar la canalización de la ayuda económica, principalmente europea que, no obstante, ya fluye a los proyectos económicos del poderoso acumulado paramilitar. El modelo económico de la reinserción paramilitar asume como propios los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y los macroyectos financiados por el BM y el BID, como parte de su sostenimiento a la estrategia de guerra preventiva y de post conflicto. Por eso, el arreglo con los paramilitares pone en funcionamiento un nuevo modelo de la guerra interior, que se exporta a Venezuela, Ecuador y otras naciones de la región. No es un proyecto para la paz. Lo es para potenciar la guerra interna y el apoyo externo a la misma, camuflado de ayuda para proyectos de reinserción y/o ayuda humanitaria. Pero, al incorporar a los integrantes de los aparatos irregulares en la seguridad democrática, mantiene los controles territoriales ya patentados por los paramilitares en grandes regiones del norte de Colombia, y los extiende a nuevos espacios, in-

cluidas las ciudades principales. Finalmente, como lo indicamos antes, el aparato montado regionalmente es una formidable herramienta de presión armada sobre los electores.

CONCLUSIÓN PROVISIONAL

La militarización de Colombia y los procesos que desencadena en la región andino-amazónica son motivo de justa preocupación. Merecen un seguimiento minucioso y una atenta actitud de alerta.

Simultáneamente, no debe pensarse que la situación interna del país está exenta de contradicciones, o mejor aún, que no hay quien luche por cambiarla y transformarla. Un abigarrado panorama de luchas sociales y políticas de masas está en crecimiento. Con el telón de fondo de las luchas insurgentes, más allá de las opiniones que tienden a minimizar su importancia, las posibilidades de cambio no están quietas. Lo importante es comprender que, en este momento, la palabra la tienen las luchas de masas, sociales y políticas, en múltiples expresiones, pero en proceso de unirse y desempeñar un papel decisivo.

BIBLIOGRAFÍA

- Amin, Samir 2003 «Le Contrôle Militaire de la Planète» en *Alternatives*, 17 février. En <<http://www.alternatives.ca/article389.html>>.
- Argenpress 2004, Información con datos del Ministerio de Defensa de Colombia, octubre 30, <www.argenpress.info>.
- Caycedo Turriago, Jaime 2004 *Plan Colombia y ALCA: un mismo modelo* (Bogotá: Ediciones Izquierda Viva)
- Contraloría General de la Nación, 2004, Dirección de Estudios Sectoriales – Defensa, Justicia y Seguridad, Cifras RSS y CODHES. Cálculos DES–DJS, junio.
- Gaviria Vélez, Obdulio José 2005 *Sofismas del Terrorismo en Colombia* (Bogotá: Planeta).
- Isacson, Adam; Olson, Joy and Haugaard, Lisa 2004 “Blurring the Lines. Trends in US Military Programs with Latin America” (Washington: Colombian Program), in Center for International Policy, CIP, <<http://www.ciponline.org/facts/0410btl.pdf>>, October.
- Martínez Martínez, Andrew Julián; Páez Amaya, Jorge Flavio; Carrillo Veloza, William René y Bacca Caicedo, Ludy Jeannette 2005 “La Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en Colombia: ¿Sólo Buenas Intenciones?” en Cuartas Nieto, Carlos (coord.) *Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad* (Bogotá: Contraloría General de la República, Documento 89-113-01-03).

- Partido Comunista Colombiano/Frente Social y Político 2005 *Por la paz democrática en América Latina, por la solución política en Colombia, por la amistad entre dos pueblos, contra el intervencionismo de Estados Unidos* (Bogotá: PCC/FSyP).
- Portafolio 2004, diario económico, “Las cifras distanciaron al presidente Alvaro Uribe del ex director del Dane” (Bogotá) en <<http://www.portafolio.com.co>>, 17 de septiembre.
- Restrepo, Luis Carlos 2004 “Los esfuerzos por la paz y la democracia”. (Bogotá: mimeo), 13 de octubre.
- Tokatlian, Juan Gabriel 2004 “La Proyección Militar de Estados Unidos en la Región” en *Le Monde Diplomatique* (Colombia), diciembre.
- Uribe Echavarría, Jorge Alberto 2004 “Se necesitan los turbohélice. Aviones o soldados” en *El Tiempo* (Bogotá), 12 de diciembre.
- Vásquez del Real, Álvaro 2004 *De la Resistencia a la Alternativa* (Bogotá: Izquierda Viva).
- Villamizar, Andrés y Espejo, Germán 2004 “El Gasto en Seguridad y Defensa en Colombia: de la Contención a la Ofensiva” en *Fundación Seguridad y Democracia, Documentos Ocasionales* (Bogotá) <<http://www.seguridadydemocracia.org>>.
- Villamizar, Andrés y Restrepo, César 2004 “Balance Militar Suramericano” en *Fundación Seguridad y Democracia, Documentos Ocasionales* (Bogotá) en <<http://www.seguridadydemocracia.org>>.